

***S E S I Ó N   P Ú B L I C A   NÚM. 77***  
***O R D I N A R I A***

***JUEVES 9 DE JULIO DE 2009***

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con quince minutos del jueves nueve de julio de dos mil nueve, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar Sesión Pública Ordinaria, los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. No asistió el señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por estar realizando otras actividades inherentes a su cargo ni la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos por encontrarse cumpliendo una comisión de carácter oficial.

Dada la ausencia del señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, primero en el orden de designación en relación con los demás señores Ministros presentes y con fundamento en los artículos 13 y Décimo Primero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presidió la sesión.

El señor Ministro Presidente en funciones Mariano Azuela Güitrón abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

## **APROBACIÓN DE ACTA**

Proyecto del acta relativa a la Sesión Pública número Setenta y seis, Ordinaria, celebrada el martes seis de julio de dos mil nueve.

Por unanimidad de nueve votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

## **VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Ordinaria Tres de dos mil nueve:

XI.- 88/2008

Controversia constitucional número 88/2008, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la propia entidad, demandando la invalidez del Decreto 824 publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de julio de dos mil ocho que reformó la Constitución Política de la entidad. En el proyecto formulado por el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se propuso: *“PRIMERO.- Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Se sobresee en la presente controversia constitucional por lo que hace al Decreto 889, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veintitrés de julio de dos mil ocho, en términos de lo expresado en el*

*considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO.- Se desestima la controversia constitucional por lo que hace a la publicación del Decreto 824, así como las fe de erratas combatidas en la primera y segunda ampliación de demanda, al tenor de lo expresado en la primera parte del considerando séptimo de esta ejecutoria. CUARTO.- Se declara la invalidez de los artículos 92, párrafo quinto, de la Constitución Estado de Morelos, así como de los artículos tercero, quinto, sexto y séptimo transitorios, del combatido Decreto 824, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de julio de dos mil ocho; de igual modo, se declara la invalidez de las dos convocatorias emitidas por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, y requerimiento de seis de octubre de dos mil ocho, impugnados en la tercera y quinta ampliación de demanda. QUINTO.- Con exclusión de los anteriores preceptos, se reconoce la validez del Decreto 824, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de julio de dos mil ocho; así como del Decreto 938, publicado en el mismo periódico el quince de octubre de dos mil ocho y los Decretos 994, 997, 998, 999, 1000 y 1003, publicados el doce de noviembre siguiente. SEXTO.- Esta sentencia surtirá sus efectos en el plazo y en los términos precisados en el último considerando de este fallo. SÉPTIMO.- Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la*

*Sesión Pública Núm. 77*

*Jueves 9 de julio de 2009*

*Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Morelos y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro Presidente en funciones Azuela Güitrón, manifestó que continuaba a la estimación del Tribunal Pleno el considerando Séptimo “XI. Haber de retiro y pensión previstos en el artículo Octavo Transitorio. Retroactividad y violación al principio de independencia judicial” (páginas de la trescientos noventa y cuatro a la cuatrocientos nueve), en cuanto se determina que no se ha actualizado la supresión del derecho que invoca el poder actor, menos puede considerarse materializada una violación a los principios de independencia judicial y retroactividad que conlleve a una declaratoria de inconstitucionalidad del artículo Octavo Transitorio.

El señor Ministro Valls Hernández precisó que al resolver la controversia constitucional 6/2007 en la sesión celebrada el cinco de junio de dos mil ocho se sostuvo que las disposiciones contenidas en el artículo 55, fracción III, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato al que se refería el asunto, que establecía la opción que tenía un Magistrado para elegir entre la pensión o el haber de retiro resultaba inconstitucional, para lo que se consideró que la ley impugnada preveía que en el caso de tener derecho a una

pensión del Instituto de Seguridad Social de aquella entidad federativa, el Magistrado debería optar por ésta o por el haber de retiro que le correspondiera, aclarando que la simple solicitud del haber de retiro, representaba la opción del servidor público, tomando en cuenta que la Suprema Corte ha sostenido que el derecho a la jubilación es irrenunciable y que toda renuncia a tal derecho resulta ineficaz, según se desprende del criterio que lleva por rubro: “JUBILACIÓN. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA JUBILACIÓN CUANDO SE TRATA DE SERVIDORES PÚBLICOS”; la cual en la parte conducente, señala: “El derecho a la jubilación tiene la característica de ser irrenunciable, es decir, que la renuncia es ineficaz cuando existe y, tal motivo aun cuando sigue siendo derecho, pertenece a la categoría de los derechos irrenunciables”.

En dicho asunto se precisó también que el haber de retiro como tal no resultaba inconstitucional, ya que tiende a mejorar la calidad de la jubilación de un trabajador del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; sin embargo, tal haber de retiro deberá ser considerado como un complemento de la jubilación que consagra la Constitución Federal y que es recogida por las Constituciones de los Estados, de manera que en congruencia con lo resuelto en dicha controversia constitucional, estimó que el artículo Octavo Transitorio resulta inconstitucional, en razón de que el derecho a la jubilación es irrenunciable y al establecer el numeral en cita

que el Magistrado optará por el haber de retiro o la pensión de forma implícita, conlleva la renuncia a la pensión, lo cual ya fue calificado por el Tribunal Pleno como contrario al texto del artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agregó que la disposición constitucional no señala que el haber de retiro sea un complemento de la pensión que pudiera otorgarse en términos de la ley de la materia, ni que ambos conceptos pudieran ser figuras semejantes, dado que en términos del artículo 89, párrafos séptimo, décimo primero y décimo segundo, sólo señalan que la ley de la materia establecerá la forma y proporción en que se otorgará ese haber por retiro; por lo que no se cuenta con los elementos para estimar que pudiera tratarse de un complemento, sino que para los Magistrados que ya cuentan con antecedentes como trabajadores al servicio del Estado o del Municipio, el artículo Octavo Transitorio es inconstitucional por restringir el derecho a la pensión irrenunciable, por lo que se manifestó en contra del proyecto.

El señor Ministro Góngora Pimentel señaló que en relación con los argumentos en los que se hace valer la violación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tomarse en cuenta que si bien es cierto que este Alto Tribunal sostiene que los Magistrados no son considerados como trabajadores para

los efectos del citado precepto constitucional, en el presente asunto se presenta un supuesto que no debe confundirse con el estudio vinculado a la controversia constitucional 32/2007; en virtud de que en aquella ocasión se impugnó un precepto de la Constitución Local, en el cual se establecía que los Magistrados, Jueces y Consejeros no serían considerados trabajadores para efectos del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Federal, en razón de que el artículo 57 de la Constitución del Estado de Baja California, así lo establecía. Recordó que en esa sesión se declaró la validez del citado precepto debido a que se comparó la naturaleza de estos funcionarios con la de los trabajadores, destacando principalmente el tema de la subordinación, sin menoscabo de que en el concepto de invalidez que se estudia en la presente controversia, se impugna esencialmente la opción que se les brinda a los Magistrados para elegir entre una pensión o un haber de retiro, por estimar que el sistema previsto con anterioridad es un derecho irrenunciable.

Mencionó que el proyecto realiza un estudio en relación con que el artículo Octavo Transitorio debe declararse válido, debido a que no se suprime el derecho a la seguridad social a que se refiere el Poder actor, ya que el modelo que existía hasta antes de la reforma constitucional, permanece vigente y únicamente se modaliza por el transitorio en comento, para dar una opción dirigida en específico a los

sujetos denunciados, a fin de que decidan entre el haber de retiro o una pensión.

Además, agregó que el contenido del Considerando Noveno del Decreto 938, en el cual se establecen los lineamientos sobre la pensión por retiro voluntario de los Magistrados, impugnado en la cuarta ampliación de la demanda, se reconoce que tratándose de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en activo, la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial Federal ha establecido que no tienen la calidad de trabajadores, porque su única subordinación es la ley; sin embargo, atendiendo a la situación histórica en virtud de la cual se ha modificado el marco normativo estadual en la materia consideró que al cumplirse determinados requisitos, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos pueden optar por una pensión por retiro voluntario como reconocimiento a sus servicios prestados a los Poderes del Estado y en particular a la administración de justicia del Estado, por lo cual puede observarse que el contenido del artículo Octavo Transitorio de la Constitución del Estado de Morelos no coloca a los Magistrados como trabajadores, sino que a quienes cubran ciertos requisitos les está reconociendo los servicios prestados al Tribunal Superior de Justicia, por haber tenido antecedentes como trabajadores y sólo se contará para efectos de antigüedad el tiempo que ocuparon el cargo de Magistrados.



Por lo anterior, se manifestó a favor del proyecto en cuanto propone declarar la validez del artículo Octavo Transitorio.

El señor Ministro Aguirre Anguiano precisó que entre los conceptos planteados en la demanda se estima inconstitucional el hecho de que se globalicen los servicios prestados en una diversa dependencia estatal o municipal para el cálculo del haber de retiro dañe al Poder Judicial del Estado de Morelos en virtud de que merma su presupuesto.

Al respecto propuso que ese planteamiento, al parecer no abordado, podría responderse que es obligación del Poder Judicial Local prever en su presupuesto los gastos necesarios para cubrir esas prestaciones, así como del Poder Legislativo Local autorizar el presupuesto respectivo.

El señor Ministro Gudiño Pelayo señaló que en la página cuatrocientos cinco del proyecto se indica: “Aunado a que cabe agregar no existe precepto de la Constitución Federal que prohíba a las entidades federativas que a través de sus legislaturas establezcan ese tipo de beneficios para los funcionarios jurisdiccionales”. Posteriormente señala que: “aquel es violatorio de los principios constitucionales de supremacía constitucional, división de poderes, autonomía e independencia establecidos en los artículos 40, 41, 116 y

133 de la Carta Magna, toda vez que su Transitorio Quinto impone una carga una carga presupuestal sin consentimiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos ni al Consejo de la Judicatura estatal, invadiendo las facultades exclusivas de la parte actora al obligarla a contemplar e incluir en el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia una partida correspondiente en forma exclusiva para el pago vitalicio de esa pensión por retiro. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, tiene un presupuesto propio e independiente y goza de facultades para ejercerlo y administrarlo por sí mismo, sin que se encuentre permitida invasión e imposición alguna.” A continuación mencionó: “Tal planteamiento también resulta infundado, pues la lectura del diverso artículo Cuarto Transitorio del propio Decreto 938 en estudio, revela que el presupuesto del Poder Judicial no se verá afectado con las pensiones que llegaran a otorgarle al amparo de dicha norma”.

Manifestó que el Cuarto Transitorio en comento, según se advierte de su transcripción, establece que el presupuesto del Poder Judicial se ampliará en la medida que se requiera para el pago de pensiones en comento, para lo cual se autoriza al Ejecutivo del Estado, a realizar las transferencias que resulten necesarias para el fin.

En consecuencia, estimó que sí está prevista la ampliación del presupuesto para cubrir las pensiones en términos del Decreto en 938, por lo que no se afecta el presupuesto del Poder Judicial ni tampoco se vulneran los principios de división de poderes, autonomía e independencia, establecidos en los artículos 40, 41, 116, y 133 de la Constitución.

Además, precisó que podría afinarse la respuesta atendiendo a lo indicado por el señor Ministro Aguirre Anguiano.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas señaló tener dudas sobre el sentido del proyecto, siendo conveniente precisar que la violación que se hace valer en principio es la relativa a la garantía de irretroactividad. Además, manifestó que el Poder actor plantea tres argumentos esenciales en cuanto a la cuestión relativa a los derechos adquiridos de los Magistrados que aplican en el sentido de que la controversia constitucional no es el medio idóneo para hacer valer una violación a garantías individuales; por lo que, el planteamiento sólo puede analizarse a la luz de los otros dos argumentos relacionados con la supresión del sistema de seguridad social en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la cuestión relativa a la invasión de esferas por el aspecto presupuestal que resulta afectado.

Ante ello estimó, que lo señalado en el proyecto en cuanto a la no calidad de trabajadores de los Magistrados para concluir que es aplicable el artículo 123 constitucional, es discutible al tratarse en esta ocasión de un tema diverso ya que en la citada controversia constitucional 6/2007 se determinó: "Que los Magistrados y Jueces tienen el derecho a percibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser modificada durante el tiempo que dure su encargo y que en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), y a la fracción XVI del artículo 116 constitucional establecen el sistema de seguridad social para los trabajadores de los Poderes de la Unión, del Distrito Federal y de los Estados, que deben garantizarse y cubrir como mínimo entre otras cosas, una jubilación, lo que deriva en que la opción entre el haber de retiro y la pensión por jubilación sea inconstitucional, pues escoger entre el primero redundaría a la renuncia de la segunda, siendo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno, desde una anterior integración ha sostenido que el derecho a la jubilación es irrenunciable y que toda renuncia a tal derecho resulta ineficaz, según se desprende del criterio de texto: "JUBILACIÓN. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA, CUANDO SE TRATA DE SERVICIOS PÚBLICOS".

Agregó que el tercer planteamiento se refiere a la afectación de esferas en razón de que la opción entre la

pensión por jubilación y el haber de retiro, implica la afectación en el presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, lo que se analiza en el proyecto en el tema dos, relativo a los actos de aplicación del Decreto de reformas a la Constitución del Estado, de manera que manifestó que se comparte la propuesta, proponiendo que traslade esta parte por razón de orden en la respuesta de los conceptos de invalidez, para que en su caso, al llegar a este punto se emita al pronunciamiento que se hizo en relación con este tema.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó la conveniencia de incorporar lo resuelto en la controversia 35/2000 en el sentido de que la limitación de su autonomía implica violación al principio de división de poderes, debiendo destacarse la autonomía de gestión presupuestal de los Poderes Judiciales, la que no se afecta en el caso concreto, dado que se aprobará una partida extraordinaria para los fines de la norma impugnada.

Por otro lado estimó que podría cometerse una violación en el caso de que de alguna manera afectara el presupuesto aprobado para un Poder y lastimara su independencia, ya que una cosa es tener un presupuesto aprobado y otra que cuente con autonomía de gestión en el uso de dicho presupuesto a lo largo del ejercicio fiscal.

El señor Ministro Gudiño Pelayo manifestó que incorporará las aportaciones de los señores Ministros Aguirre Anguiano y Cossío Díaz si el Pleno así lo aprueba.

El señor Ministro Presidente en funciones Azuela Güitrón señaló que en el caso concreto nuevamente aparece un precepto transitorio que se refiere a personas identificables, por lo que no es una norma general. Además, señaló que las intervenciones previas se refieren a situaciones hipotéticas, sin que haya certeza sobre si se afectará a los Magistrados. Enseguida, dio lectura al artículo Octavo Transitorio del Decreto 824 impugnado, con base en lo cual concluyó que no se tiene certeza sobre qué personas de las identificables se pueden afectar por ese precepto transitorio, por lo que se trata de una situación similar a otros planteamientos, considerando inoperantes los planteamientos respectivos, ya que no existen elementos para determinar si la norma impugnada es constitucional o no; incluso, precisó que probablemente quedara en minoría al considerar que el concepto de invalidez es inoperante.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que probablemente el Pleno ha determinado implícitamente que es operante el respectivo concepto de invalidez al considerarlo infundado. Por otro lado, señaló que la norma transitoria impugnada cuenta con un sistema establecido

cuyos supuestos de hecho no han sucedido aun; sin embargo, podrían estar larvados.

El señor Ministro Azuela Güitrón precisó que algunos de los señores Ministros han sostenido que el concepto de invalidez es fundado.

El señor Ministro Gudiño Pelayo indicó que en la cuarta ampliación de la demanda se impugnan los Decretos 994, 997, 998, 999 y 1000 en los cuales se otorgan sendas pensiones de retiro voluntario de cuatro Magistrados numerarios y uno supernumerario. Agregó que si se adoptara la posición de los señores Ministros Valls Hernández y Sánchez Cordero de García Villegas, ello traería la invalidez de los Decretos jubilatorios de los Magistrados, los que aceptaron la jubilación respectiva, considerando que no existe fundamento constitucional para que se dé la pensión más el haber de retiro, lo que se corrobora por el hecho de que la norma impugnada contemple la prestación respectiva como optativa, precisando que mantendría el sentido de la propuesta.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló la conveniencia de precisar los diversos argumentos que están siendo materia de estudio, en la inteligencia de que el tema materia de análisis se aborda de las fojas trescientos noventa y cuatro a la trescientos noventa y siete, en tanto que el tema

que introdujo el señor Ministro Aguirre Anguiano va de las fojas de la trescientos noventa y ocho a la cuatrocientos siete. Además, en cuanto al primer tema solicitó agregar al proyecto lo previsto en la página ciento doce del engrose de la controversia constitucional 32/2007 en la que se sostuvo: “Debe aclararse que el hecho de que no tengan acceso a las prestaciones económicas laborales que prevé la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio, Instituciones Descentralizadas de Baja California, no conlleva a que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia Local, pierdan, a su vez, los derechos de seguridad social que le son aplicables, según la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, porque unas son prestaciones típicamente laborales y las otras derivan del ámbito de seguridad social que comprenden, no solamente a trabajadores, sino a los diferentes sectores sociales de la población”.

Por otra parte, en cuanto al Decreto 938 que se estudia de las páginas de la trescientos noventa y siete a la trescientos noventa y ocho, en cuanto al caso particular de la Magistrada Carmen Verónica Cuevas López, sostuvo que el artículo Quinto Transitorio es una norma general individualizada en cuanto trata de direccionar la autonomía presupuestal por la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial.



El señor Ministro Silva Meza señaló que únicamente se pronunciará sobre la validez del artículo Octavo Transitorio impugnado, indicando no compartir la propuesta del proyecto, ya que debe aplicarse lo sostenido al resolver la controversia constitucional 6/2007 en la cual se determinó que “la seguridad social se debe organizar considerando bases mínimas, tales como cubrir accidentes, enfermedades, vejez y jubilación entre otras” ante lo cual el Pleno dispuso que debe cubrirse cuando como mínimo entre otras prestaciones, una jubilación a favor del trabajador.

También se sostuvo que “las normas que pretenden establecer la renuncia de los Magistrados de los Estados de la República, a la pensión, que en su caso, tengan derecho a recibir, por haber cotizado en los Institutos de Seguridad Social, cuando opten por el haber de retiro estatuido en las leyes orgánicas de los Poderes Judiciales y Estatales, son abiertamente inconstitucionales”, por lo que se pronunció en contra del proyecto y reiteró que el artículo Transitorio Octavo es inválido.

El señor Ministro Franco González Salas señaló sumarse al proyecto con las adiciones propuestas. Al respecto precisó que se trata de una situación especial, en la inteligencia de que la Constitución General no establece regulación aplicable. Agregó que el proyecto señala que el

sistema impugnado es más beneficioso para quien opta voluntariamente por él, siendo conveniente agregar al proyecto las consideraciones relativas a que para tener acceso a la pensión por jubilación se establecen veinte años de servicio para llegar al 50% y treinta años de servicio para obtener el 100%. Señaló que si se opta por la jubilación en el otro esquema se necesitarían dieciocho años de servicio para contar con el 50% y veintiocho para contar con el 100%, y tratándose de cesantía en edad avanzada, se llega con diez años de servicio al 50% y con quince años al 75%.

Consecuentemente, estimó que el legislador conforme al mandato constitucional previsto en la Constitución del Estado de Morelos estableció un sistema que beneficio a los Magistrados.

Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Silva Meza se determinó que son operantes los conceptos de invalidez planteados por el Poder actor; el señor Ministro Presidente en funciones Azuela Güitrón votó en contra y porque son inoperantes dichos conceptos.

A propuesta del señor Ministro Aguirre Anguiano la votación relativa al concepto de invalidez respectivo se

postergó para verificar el precedente referido por los señores Ministros Valls Hernández y Sánchez Cordero de García Villegas.

El señor Ministro Presidente en funciones Azuela Güitrón manifestó que continuaba a la estimación del Tribunal Pleno el considerando Séptimo “X. Haber de retiro y pensión previstos en el artículo Octavo Transitorio. Retroactividad y violación al principio de independencia judicial” (páginas de la trescientos noventa y siete a la cuatrocientos cinco), en cuanto se determina que son infundados los conceptos de invalidez en relación con el Decreto 938, publicado el quince de octubre de dos mil ocho, por el que se establecen los términos de la pensión por retiro voluntario de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; y sus actos de aplicación, materializados en los Decretos 994, 997, 998, 999 y 1000, publicados el doce de noviembre de dos mil ocho, por virtud de los cuales se otorgaron sendas pensiones, por retiro voluntario, de cuatro Magistrados numerarios y uno supernumerario.

El señor Ministro Góngora Pimentel manifestó que el proyecto propone declarar la validez de los Decretos impugnados, en razón de que no advierte que el Constituyente local, suprima el derecho de aquellos Magistrados que tuvieran antecedentes como trabajadores

con más de quince años, ya que les permite elegir entre su pensión o un haber de retiro.

Agregó que en materia de controversias constitucionales debe circunscribirse a la norma impugnada que es el artículo Octavo Transitorio, y el Decreto 938, que establecen los términos generales en que procede la pensión por retiro voluntario, ya que al haberse reconocido su constitucionalidad, puede considerarse que los diversos Decretos constituyen un acto de aplicación. Además, manifestó que el tercer apartado se refiere a las convocatorias, conforme a lo señalado en el problemario y a la ruta crítica.

El señor Ministro Cossío Díaz solicitó al Ministro Presidente en funciones que se abundara en el tema relativo a la Magistrada que no fue designada mediante convocatoria y posteriormente se analizara el procedimiento seguido para su designación.

En votación económica, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Azuela Güitrón se aprobó la propuesta de reconocer la validez de los decretos Decreto 938 y sus actos de aplicación,

materializados en los Decretos 994, 997, 998, 999 y 1000, publicados el doce de noviembre de dos mil ocho.

El señor Ministro Presidente en funciones Azuela Güitrón manifestó que continuaba a la estimación del Tribunal Pleno el considerando Séptimo. Convocatorias y designación de Magistrados conforme al nuevo esquema previsto en la reforma constitucional combatida (páginas trescientos cuarenta y uno a trescientos cuarenta y nueve).

El señor Ministro Góngora Pimentel se manifestó a favor del proyecto considerando que es cierto que la falta de emisión previa de los requisitos necesarios para la designación de los Magistrados, torna de inconstitucional las convocatorias, ya que el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos establece que los Magistrados serán designados por el Pleno del Consejo del Estado, a propuesta de su órgano político, el cual emitirá la convocatoria pública para designar a los Magistrados, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y, al respecto, ni la propia ley ni la Constitución establecen el procedimiento para la citada designación. Por ende, estimó que las referidas convocatorias son violatorias del principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional.

El señor Ministro Aguirre Anguiano manifestó que de la revisión que realizó a la controversia constitucional 6/2007 apreció que las razones que se sostuvieron en el asunto fueron distintas a las que prevalecen en el que se discute en la sesión.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que se trataba de cuestiones distintas pues se obligaba a los Magistrados a realizar una aportación de 8.23% para constituir un fondo extraordinario.

El señor Ministro Valls Hernández señaló que se trata de dos asuntos distintos, el relativo a que se provea de recursos al Poder Judicial y los efectos de la opción del haber de retiro o la pensión.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas sostuvo que se manifestaba por la inconstitucionalidad de la opción, es decir, porque debe ser una complementaria la pensión de haber de retiro y la jubilación, por lo que señaló que la inconstitucionalidad radica en la disyuntiva “o”.

El señor Ministro Silva Meza precisó que pese a que se trató de asuntos con particularidades distintas, ambos cuentan con un común denominador relativo al a renuncia o eventual renuncia a una prestación de seguridad social que en el caso de la pensión se constituye con las cotizaciones

que cada uno de los Magistrados ha aportado a los Institutos de Seguridad Social lo que implica hacer una renuncia a un derecho que ellos han contribuido para su establecimiento, por lo que se manifestó en contra del proyecto.

Puesto a votación el proyecto en cuanto a declarar la inconstitucionalidad del precepto y los decretos 994, 997, 998, 999 y 1000 se manifestó una mayoría de seis votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo y Azuela Güitrón. Votaron en contra los señores Ministros Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Silva Meza.

El señor Ministro Presidente en funciones Azuela Güitrón manifestó que continuaba a la estimación del Tribunal Pleno el tema relativo a los efectos de la sentencia.

El señor Ministro Cossío Díaz indicó que se podría modificar en el proyecto la parte relativa a que surta efectos a partir de su notificación al Congreso del Estado de Morelos y no de las publicaciones en el Diario Oficial.

Puesta a votación económica la propuesta modificada en el sentido de que la invalidez de los actos declarados inconstitucionales surta efectos a partir de su notificación al Congreso del Estado de Morelos, se aprobó por unanimidad

de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Azuela Güitrón, con las observaciones planteadas por el señor Ministro Cossío Díaz.

El señor Ministro Franco González Salas propuso que en relación con los efectos se incluyera la invalidez de la normativa del artículo 89 de la constitución local que no se consideró en un principio, del cual se suplió la deficiencia de la queja y se declaró su invalidez.

El secretario general de acuerdos declaró que los puntos resolutivos del asunto son los siguientes:

*“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos.*

*SEGUNDO. Se desestima la controversia constitucional por lo que hace a la publicación del Decreto 824, así como las fe de erratas combatidas en la primera y segunda ampliación de demanda, al tenor de lo expresado en la primera parte del considerando séptimo de esta ejecutoria.*

*TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 89, párrafo décimo, en la porción normativa que indica “libre y soberanamente” y 92, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como de las dos*



convocatorias emitidas por la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, y del requerimiento de seis de octubre de dos mil ocho, impugnados en la tercera y quinta ampliación de demanda.

CUARTO. En términos de la interpretación conforme contenida en el considerando séptimo de este fallo se reconoce la validez del artículo 92 de la Constitución Política del Estado de Morelos en las porciones que indican “representante”.

QUINTO. Con exclusión de los anteriores preceptos, se reconoce la validez del Decreto 824, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de julio de dos mil ocho; del Decreto 889, publicado en ese medio de difusión el veintitrés de julio de dos mil ocho; así como del Decreto 938, publicado en el mismo periódico el quince de octubre de dos mil ocho y los Decretos 994, 997, 998, 999, 1000 y 1003, publicados el doce de noviembre del año indicado.

SEXTO. Esta sentencia surtirá sus efectos en los términos precisados en el último considerando de este fallo.

SÉPTIMO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Morelos y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

A sugerencia del señor Ministro Gudiño Pelayo, el Tribunal Pleno determinó que la sentencia surta todos sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos, e instruyó al secretario general de acuerdos para que gire la comunicación respectiva a fin de que a la brevedad se realice la citada notificación; incluso, al Gobernador y al Poder Judicial del Estado de Morelos.

El señor Ministro Presidente en funciones señaló que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

A sugerencia de la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas el Tribunal Pleno acordó que se liste para la sesión pública que se celebrará el lunes trece de julio el asunto varios 430/2009.

Siendo las catorce horas el señor Ministro Presidente en funciones Azuela Güitrón convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública que se celebrará el lunes trece de julio de dos mil nueve, a partir de las once horas, y levantó esta sesión.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente en funciones Mariano Azuela Güitrón y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.

*RCC'MOKM*